



La democracia local y la toma de decisiones en el siglo XXI desde una perspectiva comparativa

Juan Antonio Zornoza Bonilla¹

Resumen:

La democracia local se ha fortalecido a partir de la década de 1990, a través de la instalación de mecanismos de participación ciudadana que vinculan a la gente con las decisiones que les preocupan directamente en materia de políticas sociales, ambientales, culturales y de convivencia. De hecho, la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones públicas se ha traducido en los cinco continentes en un fortalecimiento real de la sociedad civil. La gobernanza colaborativa ha traído una mejor asignación de los recursos para la implementación de programas orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. En algunas regiones, la administración local ha impulsado la intención de proporcionar los ciudadanos locales una transformación en los asuntos urbanos que conducen a nuevas oportunidades para la interacción y los programas de gobierno de actividad cívica. Las medidas adoptadas, han permitido modernizar el mobiliario urbano en zonas marginadas con áreas de espacio público, salud, educación, recreación y cultura. Sin embargo, los mecanismos para la implementación de estas políticas han puesto de manifiesto una tensión entre

1. Director del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Doctor en Historia de la Universidad Nacional sede Medellín.

los objetivos y los intereses de las autoridades administrativas y políticas con las necesidades y expectativas de las comunidades relacionadas que pueden causar efectos secundarios “indeseables”.

Palabras clave: democracia participativa, gobernanza, toma de decisiones, política social, reasentamientos humanos, gobiernos locales

Local democracy and decision-making in the twenty-first century from a comparative perspective

Summary:

Local democracy has been strengthened since the 1990s, through the installation of citizen participation mechanisms that link people with the decisions that concern them directly on social, environmental, cultural, and social policies. In fact, the effective participation of citizens in public decisions has resulted in the five continents in a real strengthening of civil society. Collaborative governance has brought a better allocation of resources for implementing programs aimed at improving the quality of life of local populations programs. In some regions, local government has promoted the intent to provide local citizens a transformation in urban affairs that lead to new opportunities for interaction and government programs of civic activity. The measures adopted have enabled modernize urban furniture in marginalized areas with areas of public space, health, education, recreation and culture. However, the mechanisms for implementing these policies have highlighted a tension between the objectives and interests of the administrative and political authorities with the needs and expectations related communities that can cause “undesirable” side effects

Keywords: participatory democracy, governance, decision making, social policy, human resettlements, local governments

Las reformas a la vivienda social han transformado las instituciones tradicionales y conducido a una progresiva reducción de la participación del Estado y al fortalecimiento del sector privado a asumir poco a poco esta tarea. Esta combinación de instrumentos públicos y privados se ha traducido en un estilo tecnocrático, en el cual

las instituciones estatales interactúan aparentemente con las comunidades afectadas, pero se quedan cortas en la eficacia y la legitimidad de los resultados, cuando la participación es instrumentalizada algunos procesos de planificación estratégica se convierten en simples mecanismos formales. La migración de los campesinos a las ciudades, promovida por los organismos multilaterales con la idea de apoyar la industrialización, o de modernizar las tierras rurales y proteger los ecosistemas estratégicos, ha generado un movimiento interno dinámico y unos espacios hacinados y anti-higiénicos en las zonas intervenidas. Algunas ciudades no se han preparado para esta migración de las zonas rurales, y los efectos hoy son negativos y costosos. Es posible que los resultados sean menos costosos en el largo plazo y factible mejorar la calidad de vida de las comunidades reasentadas si los gobiernos locales consideran las necesidades vitales de las comunidades locales frente a sus expectativas de reasentamiento ocasionada por: a) migración de las zonas rurales, b) decisiones administrativas relacionadas con la construcción de infraestructuras urbanas, c) la reubicación de familias en zonas de riesgo, d) por el cambio en el uso la tierra. Es propósito de esta investigación explorar métodos de formación de ciudadanía, participación y toma de decisiones comunitaria, a través de un análisis comparativo de estudios de caso que han facilitado la gestión de la comunidad, la inclusión de los anhelos de las partes afectadas por estas decisiones públicas, adaptando técnicas y mecanismos administrativos de gobernanza en la agenda local.

Introducción

El concepto de ciudadanía se ha transformado a lo largo de la historia. En el mundo antiguo se predicó de quiénes eran los sujetos de derechos políticos, habilitados para participar en la vida comunitaria y en la integridad de las interacciones estatales, económicas y sociales. Sólo los hombres con poder y riqueza podrían acceder a la participación en lo público. La modernidad amplió el espectro de la ciudadanía. Sólo hasta el siglo veinte las mujeres consiguieron la ciudadanía, el ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidas en la mayoría de las democracias del mundo. Con el tiempo, los límites entre el Estado, la sociedad y economía, históricamente controlados como una actividad del ejercicio del poder político, se tornan menos claras hoy e invitan a descentralizar un estado que está en constante reforma. Tanto las naciones desarrolladas como las atrasadas, están de acuerdo en que la vinculación de las comunidades afectadas directamente con las decisiones públicas en cuestiones tales como la nutrición

familiar, la vivienda, las oportunidades de trabajo, el espacio público, incluso bajo la lógica de un paradigma puramente racionalista, resultan más eficaces si la decisión se ventila de abajo a arriba.

Algunas decisiones gubernamentales como los problemas de seguridad, defensa, economía y desarrollo continúan siendo adoptadas por los agentes estatales. Mientras que otros asuntos que afectan a la calidad de vida de las personas, como la cultura, el trabajo, la vivienda, el bienestar y la convivencia están siendo implementadas desde la comunidad y sus resultados e impactos son visibles mientras los ciudadanos expresan las consideraciones pertinentes acerca de los programas para instalar, de acuerdo con sus intereses y las necesidades vitales. En 1990 se produjo un giro desde la democracia representativa a la participativa. La Unión Europea ha liderado este cambio hacia los organismos multilaterales de todo el mundo. La experiencia de los Estados y las Organizaciones no estatales condujeron a la aspiración de lograr una verdadera democracia radical desde la filosofía política.

En la década de 1980, fue arduo el debate entre modelos mas o menos inclusivos de democracia: elitistas o pluralistas, directos o indirectos, representativos o participativos. Los estados de la década de 1990 se orientaron hacia el reconocimiento de la diversidad y el compromiso con las esferas políticas y sociales sin determinismos económicos, con una dimensión ética inherente (Cortina, 1993, 12-19). En los cinco continentes actuales fenómenos como la migración, el reasentamiento de la población, la transformación de tejido social, resultan más factibles y eficaces si en la programación de su detalles participan activamente los ciudadanos involucrados. La opción deliberativa enriquece estas “decisiones racionales”. Las naciones han adoptado en sus instituciones los mecanismos para ejercer los derechos individuales y colectivos que forman parte de los convenios multilaterales y tratados que cada estado se compromete a cumplir y hacer cumplir. La soberanía popular extiende el concepto de ciudadanía a asuntos más cotidianos; hoy no se es ciudadano solamente para elegir, cada dos años, a los representantes de todos los ciudadanos en las instituciones políticas, e invertir en el mejor de los casos, el carácter de los intermediarios oficiales de sus constituyentes en las interacciones entre el Estado, la economía y la sociedad. La ciudadanía en el siglo XXI se ejerce todos los días, en todas las decisiones del gobierno y el reconocimiento permanente de derechos fundamentales.

Las ciudades capitales se han transformado como resultado, entre otros factores, de las tensiones entre los ciudadanos que las habitan, cuyas familias han sido residentes del territorio tradicional urbano, y las necesidades de los grupos de ciudadanos migrantes del campo o de otras áreas urbanas para su seguridad, empleo y educación.

Se han movido de su hogar a un nuevo territorio, que aparentemente les ofrece mejores oportunidades. Las políticas de desarrollo de América Latina adoptadas entre 1950 y 1970 promovieron la migración de campesinos a las ciudades para satisfacer la demanda de mano de obra de la industria. Cuando aquellas políticas de desarrollo mudaron por las políticas de desregulación para facilitar el libre comercio, la migración rural-urbana se acentuó y se promovió más fuertemente con los argumentos de tecnificar el campo (agricultura y minería), detener la expansión de la frontera agrícola y la concentración de la propiedad de la tierra rural en corporaciones y terratenientes tradicionales.

Es objetivo de este trabajo, en primer lugar, examinar los mecanismos disponibles en el mundo para adoptar las decisiones públicas de manera colectiva, cuando los logros de estas medidas requieren considerar las específicas aspiraciones de las comunidades. Segundo, analizar aquellos enfoques más exitosos para incidir en el bienestar real de los colectivos humanos. Y tercero, proponer mecanismos relevantes para un determinado caso de intervención pública sobre las familias y las comunidades: el reasentamiento humano.

Marco conceptual: Gobernanza, institucionalismos y actores

Gobernanza territorial local

Los Estados modernos tienden a involucrarse en relaciones directas, sin intermediarios con sus ciudadanos, para hacer cumplir las normas, determinar cómo los niños deben ser educados, la prestación de servicios de asistencia social para los necesitados, regulan lo que podemos comer, beber o fumar, y asumir las responsabilidades de otro modo al que históricamente ha sido asumido por las familias, grupos de parentesco, instituciones religiosas, gremios profesionales, asociaciones de comercio, y las unidades autónomas de gobierno local territorial. Sin embargo, ningún sistema político puede tener éxito en su totalidad con la abolición de intermediarios entre los hogares y el estado, y desde luego no en el nivel local. Todos los sistemas políticos tienen que llegar a un acuerdo entre la autoridad del aparato estatal formal y la influencia de las instituciones locales no estatales. Las poblaciones que ocupan un espacio local común tienen intereses y necesidades comunes. Los recursos deben ser movilizados, asignados o administrados; las disputas resueltas; las intrusiones amenazantes repelidas; y las ceremonias y celebraciones colectivas organizadas.

Estas necesidades comunes tienden a ser especialmente intensas en materia de

vivienda y asentamiento en donde los medios de vida se superponen: en aldeas agrarias, en los asentamientos ganaderos y mineros, en las comunidades pesqueras, o en los sectores especializados en determinadas líneas de comercio o la producción de las zonas urbanas. Sin embargo ningún estado desarrollado e institucionalizado, puede prescindir totalmente de un grado de voluntarismo no estatal a nivel local. La prestación de la gobernanza territorial, como las asociaciones de vecinos de algún tipo, están muy extendidas, incluso en las localidades urbanas y suburbanas más ricas de las naciones más ricas. Sin ellas no podrán impartir justicia o destinar grandes sumas de dinero para construir o mantener escuelas, clínicas, caminos y sistemas de suministro de agua o electricidad. Estas instituciones territoriales locales rara vez operan independientemente del aparato estatal formal. Por lo general son reconocidas de manera informal por agentes del Estado, y en cierta medida integradas en el sistema de gobierno. En los países ricos, la interacción de las organizaciones de voluntarios locales con el aparato estatal plantea algunas cuestiones conceptuales acerca de los límites entre el Estado y la sociedad. Sin embargo, la gobernanza territorial local, informal no suele ser un problema político muy polémico. Las personas en los países ricos contemporáneos son más propensas a lamentar un déficit voluntarismo de local que se involucren en para neutralizar el despotismo de asociaciones locales y frenar sus poderes. En los países más pobres, la situación es a menudo muy diferente: el carácter de la gobernanza territorial informal (o cuasi-formal) es más probable que sea en la agenda política, y las actitudes son más propensas a estar polarizadas. “La razón principal es que estas organizaciones tienden a ser más influyentes. Ejercen más autoridad, y por lo tanto atraen más atención política. En primer lugar, en las zonas agrarias, ganaderas, mineras o en entornos urbanos pobres, hay más interacción entre la ubicación de residencia y la ubicación de los medios de vida, y las cuestiones por resolver son más claramente locales: los sistemas de riego; las prácticas de pesca; las disputas inter-personales y sobre la propiedad; la gestión de tierras comunales; y recaudo de impuestos y las relaciones con agentes externos. En segundo lugar, y más importante aún, en los países más pobres el aparato del Estado es a menudo menos extenso. Las agencias del estado tienen menos probabilidades de contar con los recursos, el personal y la organización para penetrar hasta el nivel local, y para hacer cumplir la ley estatal, recaudar impuestos, contratar y supervisar a los maestros de escuela asignar los derechos mineros y licencias de venta de licores, resolver disputas, registrar nacimientos y muertes, proporcionar alivio a los pobres, cavar desagües o promover las identidades nacionales. La relación entre las organizaciones estatales y los ciudadanos es más probable que sea mediada por alguna institución difusa o

ambigua, lo que en cierta medida se realiza las funciones locales del Estado sin un mandato muy claro o formal". (Ananth Pur y Moore, 2007, 7-9)

Gobernanza colaborativa

Entre 1987 y 2007, se ha desarrollado una nueva estrategia de gobierno llamada "gobernanza colaborativa". Este modo de gobierno supone múltiples partes interesadas en foros conjuntos con agencias gubernamentales que participan en la toma de decisiones orientadas por consenso. La gobernanza colaborativa reúne a actores públicos y privados en foros colectivos con agencias del gobierno para participar en la toma de decisiones. La literatura sobre la gobernanza colaborativa contribuye a desarrollar un modelo de contingencia. (Ansell, Chris & Alison Gash, 2007; 16). Hay una serie de factores cruciales en el propio proceso de colaboración. Estos factores incluyen el diálogo cara a cara, el fomento de la confianza y el desarrollo de la comprensión compartida y compromiso. Un círculo virtuoso de cooperación tiende a desarrollarse cuando los foros de colaboración se centran en "pequeñas victorias" que profundizan en la confianza, el compromiso y la comprensión compartida. En 2007, Ansell, Chris & Alison Gash, realizaron un estudio meta-analítico de la bibliografía existente sobre colaboración con el gobierno que permite el desarrollo de un modelo general de gobernanza colaborativa. Después de revisar 137 casos de gobernanza colaborativa a través de una gama de áreas de política, identificaron variables críticas que influyen en si este modo de gobernanza va a producir o no, una colaboración exitosa. Estas variables incluyen antecedentes de conflicto o de cooperación, incentivos para que las partes interesadas participen, desequilibrios de poder y de recursos, liderazgo y diseño institucional. El objetivo final es desarrollar un enfoque contingente de colaboración que puede resaltar las condiciones en las que la colaboración con el gobierno será más o menos eficaz como un enfoque para la formulación de políticas. La mayor parte de la literatura sobre la gobernanza colaborativa consiste en estudios de caso de un solo caso que se centra en cuestiones de gobernanza en sectores específicos como la gestión local de las escuelas, la policía comunitaria, Consejos de la cuenca del río, negociación regulatoria, planificación colaborativa, asociaciones de salud de la comunidad, y co-gestión de los recursos naturales. (Ansell, Chris & Alison Gash, 2007)

De este estudio se propuso la siguiente definición del concepto de gobernanza: Un acuerdo de gobierno en el que uno o más organismos públicos están involucrados directamente con partes interesadas no estatales en un proceso de toma de decisiones colectiva que es formal, dirigido a un consenso y deliberación y su objetivo es hacer o aplicar la política pública o gestionar programas o bienes públicos. Esta definición

enfatisa seis criterios principales: 1) Los foros son convocados por los organismos o instituciones de gobierno. 2) Los participantes en el foro incluyen actores no estatales. 3) Los participantes que están directamente involucrados en la toma de decisiones no sólo son “consultados” por los organismos públicos. 4) El foro se organiza formalmente y se reúne de forma colectiva. 5) El foro tiene como objetivo tomar decisiones por consenso (incluso si no se logra un consenso en la práctica). 6) El enfoque de colaboración contiene un componente crítico en el concepto de *governance*. (Ansell, Chris & Alison Gash, 2007)

La *gobernanza colaborativa* es un tipo de gobierno en el cual los actores públicos y privados trabajan colectivamente en formas diferentes, con procesos especiales, para establecer normas y reglamentos para la provisión de bienes públicos. El término “organismo público”: involucra instituciones públicas como las burocracias gubernamentales, los tribunales, las legislaturas y agencias de gobierno regionales o locales. Pero la institución pública típica es una agencia de la rama ejecutiva. Tales organismos públicos pueden iniciar los foros de colaboración, para el cumplimiento de sus propios fines o para cumplir con un mandato. Aunque los organismos públicos suelen ser los iniciadores del proceso de colaboración, los actores no estatales son indispensables. “Las partes interesadas” se refieren tanto a la participación de los ciudadanos como a la participación de grupos organizados. El término “grupos de interés” se refiere tanto a las entidades públicas como a los actores no estatales, aunque algunos organismos públicos tengan un distintivo papel de liderazgo. Se trata de una comunicación bidireccional con influencia entre las agencias y los actores, y oportunidades para las partes interesadas de hablar unas con otras. Las agencias y las partes interesadas se reúnen en un proceso deliberativo y multilateral. En otras palabras, el proceso debe ser colectivo. La asociación también significa que los actores no estatales tendrán la responsabilidad real de los resultados de las políticas. Por lo tanto, las partes interesadas deben participar directamente en la toma de decisiones.

Gobernanza nuevo modelo de gestión de la tierra

Los procesos nacionales de elaboración y aplicación de políticas son cada vez más permeables a la influencia de los actores internacionales, regionales y locales. La tendencia hacia la globalización, la regionalización, la privatización, la descentralización, la desregulación y el fortalecimiento de las estructuras locales han transformado a la política y la gobernabilidad. (Zurbriggen, C. & AS. Milanesi 2008). El nuevo enfoque de desarrollo local plantea la importancia de diseñar políticas públicas para fortalecer las oportunidades de interacción entre los actores locales con el fin

de generar capital social y lograr su efectivo desarrollo. En este contexto, se considera que la creación de redes es un factor central para el éxito de las políticas, que surgen como resultado de la interacción y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno (supranacional, nacional, regional y local) y los actores e instituciones públicas y privadas que operan en el sector social y productivo (empresas, asociaciones empresariales, centros de tecnología, universidades, ONG, etc.). Este énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los actores para participar en la política se basa en el apoyo a programas de promoción de redes público-privadas conjuntas, la planificación participativa, la participación en el desarrollo de los presupuestos locales, la promoción de los procesos de innovación institucional y productiva, destinados esencialmente a lograr un mayor nivel de competitividad e integración social. Este nuevo paradigma promueve un diseño de políticas de abajo hacia arriba de una relación profunda entre el Estado, el mercado y la sociedad. En este sentido, se pasa a considerar no sólo la relevancia de un componente desde arriba (top-down), sino también las acciones de las instituciones y los actores locales en el enfoque a la política (bottom-up).

El gobierno se presenta como la solución a los problemas de coordinación en las sociedades modernas, frente al modelo jerárquico, el mercado y una nueva gestión pública. En general, aunque la literatura sobre gobernabilidad se presenta como una solución a los problemas clásicos de coordinación, se ha generado una serie de preguntas; incluyendo, si esta forma específica de interacción en la administración pública, entre los sectores público y privado, es capaz de fortalecer la eficacia y la legitimidad de las políticas públicas. El gran desafío es demostrar que la gobernanza es la mejor herramienta de política para coordinar y dar coherencia a las acciones colectivas cuando el Estado ya no es el único centro de poder y conducta monopólica. Sin embargo, tanto desde la perspectiva teórica de la política hasta la práctica, no se ha analizado en profundidad el papel del Estado, los distintos niveles de gobierno y su relación con la sociedad civil, en donde las redes son cada vez más importantes en la solución de los problemas públicos. Se pueden ocasionar problemas tales como la disolución de la responsabilidad dada la multiplicidad de actores que participan en la política pública. También hay diversas limitaciones a nivel de políticas, se pasa por alto que el gobierno también tiene efectos negativos sobre el desarrollo de políticas, tales como los problemas de representatividad de los organismos que participan en una red, la exclusión de algunos grupos y la creación de sistemas de clientelismo. (Zurbriggen, C. & Milanesi 2008)

Metodología y Resultados

Desde una perspectiva comparativa se examinan diversos casos de participación en la toma de decisiones de parte de organizaciones civiles frente a programas que tienen un impacto social específico y en el cual concurren diversos actores y niveles de gobierno.

La desigualdad en América Latina está estrechamente relacionada con el hábitat y el acceso a espacios urbanos sostenibles y habitables. Tradicionalmente las comunidades vulnerables son reasentadas por las autoridades nacionales y locales en las capitales latinoamericanas, porque son migrantes refugiados de zonas rurales en conflicto. El hábitat urbano latinoamericano ha ganado interés y el creciente proceso de urbanización en la región, hace que sea sometido a la intervención de las autoridades nacionales, los gobiernos regionales y locales y las organizaciones multilaterales que tratan de mitigar los problemas sociales complejos generados por la desigualdad y la concentración de la tierra y la riqueza. Las manguantes políticas de vivienda social se relacionan con los programas de bienestar que proporcionan unas unidades mínimas de vivienda construida, vinculados más a los intereses del mercado que a las necesidades, los derechos e intereses de los ciudadanos que son las comunidades que habitan en ellos. Hoy resulta vital explorar y proponer mecanismos locales de gobernanza que promuevan la articulación entre las autoridades y los ciudadanos, para la construcción de soluciones de hábitat en la que los espacios habitables cumplan los imaginarios de las comunidades involucradas, favorecen el básico gobernanza local y llevan a la aplicación de las decisiones eficaces, legítimas y equitativas en el hábitat urbano, que debatan los conceptos de gobernanza colaborativa, redes de políticas, política comunitaria, medio ambiente urbano, hábitat popular y auto-gestión ciudadana.

En los últimos 10 años, la región de América Latina se enfrenta a reformas prescritas por sus élites y las instituciones multilaterales. La migración del campo a los centros urbanos, ha sido posiblemente patrocinada por los gobiernos bajo criterios de eficiencia y productividad, que ha significado un cambio en la decisión adoptada por las autoridades locales. Las comunidades locales exigen un reordenamiento del espacio urbano coherente con las necesidades de sus familias y comunidades, la formación de ciudadanía diferenciada, el fortalecimiento de sus organizaciones y la autonomía de los líderes, pueden llegar a consolidar las acciones de gobierno local en el que la construcción conjunta de espacios para la vida pública, de la mano con las autoridades municipales, se presenta como una alternativa viable para rediseñar

el territorio urbano, reasentamientos, espacios públicos y espacios alternativos para los migrantes del campo a las ciudades. El análisis de casos en que las autoridades y los ciudadanos recurren a foros de consulta y construcción conjunta de espacios para ubicar a su familia, la escuela o el trabajo cerca de su hábitat, a través de mecanismos alternativos de consenso y trabajo conjunto en el espacio urbano, tales como el desarrollo de infraestructura, el reasentamiento de los riesgos naturales, los cambios en el uso del suelo, la adecuación de los espacios naturales de uso público, la migración a las ciudades, la innovación social y el desarrollo institucional en tiempos posteriores a los conflictos.

En la segunda década del nuevo milenio, algunos centros urbanos de América Latina se enfrentan a presiones del crecimiento de la población, migración, conflicto armado, fenómenos naturales, el mercado y la tenencia de la tierra, que implica la necesidad de nuevas prácticas sociales innovadoras en el contexto de la gobernanza local, para asegurar la colaboración a todos los niveles entre gobernantes y gobernados. La relación entre los problemas urbanos derivados de la necesidad o el interés en el reasentamiento de algunas comunidades y el desarrollo de procesos para fortalecer las comunidades organizadas que exploren métodos de relación con la toma de decisiones promovida por las autoridades territoriales en el espacio urbano, se orienta a investigar la naturaleza de estos mecanismos, sus relaciones e idoneidad como herramienta de consenso para la gestión de la tierra y su réplica potencial que puede compartir la claridad de los casos exitosos. La propuesta para sugerir herramientas, basada en las reglas del sistema político para apoyar la formación y la organización de diversas ciudadanías alrededor de espacios comunes compartidos, en los cuales resulta posible construir conjuntamente comunidades amigables y sostenibles que habitan en estos espacios urbanos.

Instituciones, actores y estado

- Alemania-

Desde la década de 1990, ha habido una creciente presión para reformar la base institucional de la política local en Alemania, así como los procesos y estructuras internas. Los cambios resultantes en los procesos locales de toma de decisiones del gobierno son el foco de este tema. Las tendencias de modernización se dirigen en dos direcciones contradictorias: hacia la participación y hacia la *economización*. La primera se evidencia por la reforma radical de las constituciones de los gobiernos lo-

cales en el modelo del sur de Alemania (especialmente la introducción de elecciones directas para el alcalde y referendos locales), y la creciente importancia de la democracia cooperativa (por ejemplo, los procesos de Agenda Local, los procedimientos de mediación y las iniciativas para promover la participación cívica). La *economización* de la política local, por su parte, es evidente en el gestión pública de la administración local, en la privatización de los servicios locales, en el aumento del número de asociaciones público-privadas, y el establecimiento de estructuras competitivas (Bogumil, 2007).

La descentralización como moda se basa en el supuesto de que el resultado de las decisiones refleja las necesidades y prioridades locales. Sin embargo, la democracia representativa, a través de elecciones periódicas, según Bogumil, (2007) quien explora el gobierno local en Alemania, indica que tiene una larga tradición en el estudio de las decisiones locales (Grauhan 1970; Derlien et al 1976; Kevenharster 1977; Ellwein / Zoll 1982; Banner 1982; Gabriel 1983; 1989; Gabriel / Voigt 1994). Como regla general, se concentra en la toma de decisiones del gobierno local en el sentido más estricto del término, es decir, la interacción entre los tomadores de decisiones dentro de la administración político-sistema (consejo, la administración, el alcalde). Durante mucho tiempo, se ha prestado más atención a la relación entre el consejo de administración y, en el control político de la administración. La investigación sobre el gobierno local alemán, sin embargo, no se ha centrado en procedimientos como el examen de las estructuras de poder locales, que con el estudio de los procesos de toma de decisiones, han sido los enfoques clásicos.

Hasta principios de 1990, el estudio empírico de decisiones a nivel local se ha centrado en dos cuestiones principales (cf. First 1975 en selectividad en los procesos de toma de decisiones del gobierno a nivel local): Quién está involucrado en la toma de decisiones, que intereses persiguen, en dónde se toman las decisiones, y qué prevalece? Diferentes etapas en el proceso de toma de decisiones se distinguen, desde la iniciativa y la preselección de alternativas hasta la adopción formal; y entre los diferentes recursos de poder (autoridad formal, las capacidades de información, movilización de apoyo político). ¿Qué factores son responsables de las estructuras de liderazgo dado? ¿Qué influencia tienen las diferentes constituciones de los gobiernos locales en los procesos de toma de decisiones y los resultados de las políticas? (Bogumil, 2007, 2) un mecanismo para el establecimiento de estas necesidades y prioridades.

En América Latina la reforma de la democracia local se produjo tras el fin de las dictaduras en países más autoritarios que adoptaron el cambio libre prescrito por la banca multilateral y sus países propietarios. En otros países, como Colombia y Costa

Rica, se adoptaron las disposiciones de libre comercio ‘voluntariamente’ por los líderes de los gobiernos democráticos a finales de la década de 1980 y principios de 1990. Estos requisitos incluyen la descentralización política y administrativa, la desregulación del comercio, la flexibilidad laboral y privatización de algunas instituciones sociales del Estado. En Colombia, por ejemplo, la elección popular de alcaldes se introdujo en 1986, y la elección popular de gobernadores con la nueva Constitución de 1991. Sin embargo, para las democracias locales no se implementaron más mecanismos democráticos de toma de decisiones, en el caso de Colombia, por ejemplo, hasta 2011 con la Ley orgánica de ordenamiento territorial. Ellas todavía enfrentan una dura resistencia de los políticos clientelistas tradicionales, que participan en maniobras repetidas de corrupción y el mal uso de público fondos.

Democracia participativa y ciudadanía efectiva

- Kenia y Uganda-

La mayor parte de los sistemas de gobierno local ofrecen pocas oportunidades para que los ciudadanos participen, en particular para los pobres, pero disponen de unos mecanismos de rendición de cuentas. Es importante revisar la literatura relacionada a nivel local con la toma de decisiones, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Un estudio de la toma de decisiones sobre el uso de los recursos en una muestra de los gobiernos municipales en Kenia y Uganda, muestra que las administraciones locales en Kenia han ofrecido tradicionalmente alcance mínimo para la participación de ciudadanos o la rendición de cuentas, pero esto está empezando a cambiar, principalmente como resultado de condiciones de rendimiento aplicados a través del Fondo de transferencia de Autoridades Locales de reciente introducción (LATF), junto con una sociedad civil cada vez más activa.

En Uganda, que ha experimentado una radical descentralización, hay mucho mayor margen para la participación ciudadana en el ámbito local, pero todavía hay muchos de los mismos problemas locales de rendición de cuentas como en Kenia. Factores como el liderazgo local comprometido, monitoreo central de rendimiento, las organizaciones de la sociedad civil articulada y la disponibilidad de información son críticos. Pero incluso con estos, no hay garantía de que la toma de decisiones descentralizada serán incluidos los pobres. (Devas y Grant, 2003)

Funcionarios políticos electos vs participación ciudadana

- Rumania-

Un estudio rumano de Haruta y Radu en 2008, examina los aspectos relacionados con la participación de ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en el nivel local y de condado en Rumania, desde el punto de vista del nivel superior de funcionarios públicos. El interés de la investigación para este problema es parte de un más grande esfuerzo de investigación dirigido a la determinación de los principales patrones del proceso de toma de decisiones en las instituciones públicas rumanas, incluyendo las características de los modelos interactivos de toma de decisiones. Este trabajo pretende averiguar quiénes son los actores políticos que participan en las diferentes etapas del proceso de toma de decisiones, el nivel de su participación y el grado de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. La investigación se realizó sobre una muestra representativa a nivel nacional, en la cual incluyeron funcionarios de primer nivel y funcionarios públicos que trabajan en las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de condados, municipios, ciudades y comunas. La tasa de respuesta fue de aproximadamente 30%, basada en 381 cuestionarios diligenciados y enviados de vuelta por los encuestados. La novedad de la investigación radica en el hecho de que sólo se analizaron las instituciones públicas locales y se centraron exclusivamente en la percepción del nivel oficial de servidores públicos sobre la participación ciudadana. La investigación muestra un bajo nivel de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, a pesar de que las instituciones públicas del nivel local y del condado les proporcionan los medios necesarios para la participación. Sin embargo, cuando los ciudadanos presentan sugerencias en la etapa de formulación de políticas, sus sugerencias son tenidas en cuenta por los funcionarios públicos. La investigación suministra suficiente evidencia para caracterizar la participación pública en Rumanía a nivel local y comarcal como forma de consulta de acuerdo con la escala de participación. Incluso si los ciudadanos tienen una oportunidad de ser oídos, los funcionarios políticos electos tienen el control sobre el proceso de toma de decisiones. (Haruta y Radu 2009)

Migraciones y vivienda social

- América Latina-

La industrialización provocó la migración de campesinos a las ciudades. Olas de migración han sido promovidas para garantizar trabajadores disponibles en las actividades de las nuevas fábricas y en la construcción de viviendas para edificar un nuevo modelo de asentamiento, más durable y económico para los gobiernos locales. Durante el siglo XIX Europa fue testigo del crecimiento de sus ciudades y el despoblamiento de las zonas rurales. En América Latina el proceso ha sido más lento, pero acelerado desde la década de 1950, cuando son prescritos por los organismos multilaterales como estrategia para el modelo de crecimiento económico de industrialización por sustitución de importaciones. La idea funcionó hasta la década de 1970, pero las nuevas exigencias de los organismos multilaterales, cambió el modelo de desarrollo por uno de libre comercio para abrir mercados en el mundo subdesarrollado a los bienes y los servicios de los países desarrollados. El campo, entonces resultó interesante como un espacio para la automatización y modernización de la producción agrícola y la minería a gran escala, pero no para generar empleos. Por último, la política de migración rural-urbana se hizo más fuerte en la década de 1990. (Zornoza, 2010) Las principales ciudades de América Latina se vieron desbordadas para dar cabida a las olas migratorias de campesinos que buscan empleo, educación o seguridad para sus vidas y las de sus familias. La población de las capitales de América Latina se multiplicó en poco tiempo y los gobiernos locales tuvieron que enfrentar problemas de pobreza y desigualdad. Los asentamientos sub-normales en las afueras de las ciudades capitales tuvieron que ser atendidos por las autoridades municipales por los peligros naturales y las malas condiciones de vida de los asentamientos. La calidad de vida de los pobres comenzó a ser objeto de la atención de las políticas municipales. Estas políticas públicas locales afrontaron las reformas privatizadoras de los servicios sociales patrocinadas por la banca multilateral. El impacto sobre las finanzas públicas era especialmente grave cuando los fondos para cubrir estas medidas provenían del crédito externo. La auto-gestión local se volvió imprescindible en la vida social y en la construcción de vivienda popular. La comunidad construyó nuevos asentamientos mediante la modalidad de autoconstrucción que permitieron la expansión efectiva de las ciudades sin abordar las restantes necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable.

Desafíos para el Sector Comunitario

- Irlanda-

El potencial de desarrollo de la comunidad para informar y mejorar la formulación de políticas y para dar una voz de lucha contra la pobreza y otros grupos de la comunidad en el proceso de formulación de políticas es ampliamente aceptado, por ejemplo, por la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Programa de la ONU para el desarrollo, la Organización Mundial de la Salud. Este papel y la contribución se evidencia claramente en el impacto de los grupos y organizaciones de la comunidad en el desarrollo de políticas en Irlanda, especialmente a finales de 1990 y principios de 2000 (Pobal, 2006). También se pone de manifiesto en las oportunidades generadas por el sector comunitario para algunos de los grupos más excluidos en la sociedad irlandesa para determinar sus propios intereses, a participar en la toma de decisiones colectiva y en acción colectiva para desarrollar los conocimientos, las habilidades y la confianza necesarias para ejercer influencia sobre las fuerzas que rigen sus vidas (CWC, 2006b). (Siobhan Lynam , 2006)

Sin embargo, el avance de modelos participativos de desarrollo y la formulación de políticas dentro de un marco en el que no se establece el programa siempre ha sido, y seguirá siendo, un importante lucha para el sector comunitario. Influir en la política es un proceso lento, y exige los recursos de los grupos comunitarios. La participación en el proceso de formulación de políticas puede lograrse después de una larga campaña por grupos de la comunidad y parecen perder su prioridad para el gobierno. A veces una gran cantidad de energía que se gasta por grupos que aportan su conocimiento y experiencia en una serie de foros de consulta; entonces cuando la decisión de política se toma y la estrategia de aplicación definida, está muy lejos de las expectativas o las necesidades que tengan un impacto significativo en la pobreza o la exclusión. (Siobhan Lynam , 2006)

También se requiere que todas las políticas gubernamentales estén transversalizadas con los programas para combatir la pobreza, promover la igualdad y la equidad de género. Esto significa que los departamentos gubernamentales, las autoridades locales y las agencias estatales deben evaluar todas las políticas y programas en sus fases de diseño y revisión, en relación con el posible impacto que van a tener, o han tenido, sobre la pobreza y las desigualdades que conducen a la pobreza. El propósito del ejercicio es reducir la pobreza. El mismo principio se aplica para pruebas de género en consonancia con las obligaciones legales derivadas de la incorporación de la perspectiva relativa al género. (Siobhan Lynam , 2006)

La toma de decisiones de Género y local

- Afganistán-

Entre marzo y octubre de 2004, se llevó a cabo en Afganistán el Proyecto de la Unidad de Investigación y Evaluación (AREU), destinado a mejorar las políticas y programas que tenían como objetivo aumentar la participación de mujeres en la vida pública. Con este fin el proyecto se orientó a generar un mejor entendimiento entre las ONG, las Naciones Unidas, los donantes y el Gobierno afgano sobre cómo se priorizan, agendan y se toman las decisiones en los hogares y la comunidad, y cómo los hombres y las mujeres participan en el proceso de toma de decisiones. En este caso, ha sido muy fácil hasta ahora a los hombres reflejar una apariencia externa de estar dispuesto a dar permiso para que las mujeres participen en actividades de generación de ingresos. Pero hasta el momento de la investigación, este tipo de iniciativas no se han materializado. Su participación en los procesos de toma de decisiones de la aldea eran inexistentes en el plano formal, y era extremadamente difícil de identificar a nivel informal. Algunas de las mujeres tenían claramente más acceso a la información en igualdad de condiciones con sus maridos, pero quedaba claro que todas las personas sin educación en el pueblo no estaban participando plenamente y que la información que tenían era a menudo inexacta. (Shawna Wakefield, 2005)

Esta es una herramienta importante para las personas con poder para evitar a los que no lo tienen, y las causas y efectos de esta necesidad deben ser mejor entendidos. En cuanto a la investigación demostró en *Hazrat-e Sultan*, incluso el establecimiento de una *shura* de mujeres se reuniría con desafíos extremos ya que hay una falta general de confianza en iniciativas organizadas desde el exterior. Este estudio recomienda contratar personal local que conoce las lenguas locales y es respetuoso de las tradiciones locales. Esto ayudaría a aumentar la comprensión entre las ONG y las poblaciones locales, y aumentar la confianza en los objetivos de las ONG. Esto es particularmente importante en áreas conservadoras, y debe ser priorizado; aumentará los niveles de confianza y la cooperación con personal de las ONG, y aumenta la probabilidad de que las mujeres sean capaces y estén dispuestas a participar en las iniciativas de desarrollo. (Shawna Wakefield, 2005)

Instituciones

-India-

Los consejos consuetudinarios de aldea (CVC) son muy comunes en la India rural. Una investigación informó sobre una investigación llevada a cabo en 30 aldeas en el estado de Karnataka, elegidos sobre una base semi-aleatoria. Hubo un CVC en cada uno. De este modo, Anirudh Krishna ha estado haciendo, igualmente, la investigación a largo plazo en 69 aldeas en los estados del norte de la India de Rajasthan y Madhya Pradesh, y los CVC también se encuentran en funcionamiento en todas partes (2002). Estos consejos consuetudinarios de aldea se han generalizado y se cree que están desapareciendo los vestigios de un orden sociopolítico pre-democrático y jerárquico. (Ananth Pur y Moore, 2007). En los medios de comunicación de la India, que se representan como instrumentos para la dura aplicación de las tradicionales normas de casta y de desigualdad de género. Sin embargo, la investigación en el estado de Karnataka revela un panorama muy diferente. Los CVC se encuentran en casi todos los pueblos. Mientras continúan sin resolver las disputas locales y el ejercicio de la autoridad judicial es limitada, se están llevando a cabo nuevas funciones en materia de desarrollo y elecciones, cada vez más pluralistas y democrática, y proporcionar una amplia gama de servicios que se valoran positivamente por los aldeanos, especialmente por las mujeres. Los CVC a menudo interactúan estrechamente y de forma sinérgica con los consejos formales, electos localmente (*Grama Panchayats*). Esto se asemeja mucho a otros hallazgos de la ciencia social empírica la investigación en la India: Una institución tradicional e informal, que se pensaba, por los intelectuales y las elites, que iba a desaparecer en el basurero de la historia, resulta que tiene una considerable capacidad de resistencia, para seguir disfrutando de una especie de renacimiento, y está adaptándose a las instituciones políticas formales modernas en India. (Ananth Pur y Moore, 2007)

El análisis de datos de una muestra de 30 aldeas en el estado de Karnataka recogió durante un período de cuatro años una muestra considerable de variaciones entre aldeas en los niveles de actividad de los CVC. El factor único más importante para explicar esta variación es la cercanía de su relación con el consejos formales electos, *Grama Panchayats* (GP). El papel Pur y Moore concluye con algunas especulaciones sobre por qué los CVC son tan boyantes y activos en este contexto, mientras que en otros lugares similares las instituciones tradicionales han sido consideradas como baluartes de la desigualdad y la jerarquía, y han generado considerable oposición políti-

ca. Una de las principales razones puede ser que los CVC operan en un ambiente relativamente democrático y pluralista en el cual el Estado formal proporciona muchos servicios con bastante eficacia. Los CVC no tienen el monopolio, y continuamente tienen que ganar la autoridad que ejercen. (Ananth Pur y Moore, 2007, 3)

La democracia deliberativa

- Sudáfrica -

La democracia deliberativa significa tanto el proceso de consulta, debate y discusión entre ciudadanos y grupos de la comunidad, así como el proceso de formulación y aplicación de políticas en las que estén implicados funcionarios estatales, en consulta y cooperación con los actores a nivel comunitario. Para nuestros efectos, el desarrollo se entiende como la extensión, por parte del Estado, de los servicios sociales como la salud, la educación, el bienestar social, el alivio de la pobreza y la desigualdad, y la provisión de infraestructura relacionada con los servicios públicos, en lugar de desarrollo exclusivamente en términos de crecimiento económico. Nuestra comprensión del desarrollo, sin embargo, incluye el crecimiento económico referido a las oportunidades creadas para la creación de empleo y para estimular los aspectos de la vida social, e inversiones para el desarrollo y de infraestructura. (Mokwena y Fakir, 2009)

El análisis de la relación entre democracia deliberativa y desarrollo puede ser visto como parte de una rearticulación con el Estado desarrollista; se trata de un estado que no es más que intervencionista en la naturaleza y en la forma en la que dirige los excedentes en la economía y gasta su presupuesto en el desarrollo social, sino que es un estado que es fundamentalmente democrático y participativo. Gran parte del discurso actual sobre el desarrollo sugiere que el desarrollo sostenible y el cambio positivo dependerá, entre otras cosas, de la instalación de mecanismos de participación para los procesos y espacios de formulación de políticas para los ciudadanos (Stiglitz 2002), donde puedan expresar sus preocupaciones y una visión del tipo de mejoras sustantivas que les gustaría ver en sus condiciones socio-económicas y socio-políticas. Además, la democratización de los discursos públicos y de política son vistos como un medio para asegurar que los funcionarios del estado son responsables ante los grupos que representan. Como Bangura y Hedberg sugieren, democracia es vista como un buen instrumento de rendición de cuentas y para mejorar los resultados de las políticas públicas. (Mokwena y Fakir, 2009)

Consecuencias de la gobernanza ambiental 1993

La cumbre de Río 1993 dejó el legado de la gobernanza multilateral cuyos instrumentos tienen nuevas prácticas e instituciones propias en los países miembros. El mecanismo por excelencia es el enfoque contractual, por el cual las autoridades estatales y los actores no estatales aúnan esfuerzos a través de convenios para conseguir y distribuir los beneficios derivados de los resultados obtenidos con los acuerdos establecidos. Los impactos sociales y ambientales de los proyectos de inversión promovidos por los bancos multilaterales, se encuentran hoy con un marco normativo que condiciona los desembolsos para el cumplimiento de unos niveles mínimos y básicos de participación de la comunidad, en especial las minorías étnicas. Aunque hay propuestas de abajo hacia arriba para la participación de la comunidad en la decisión de tomar o no los proyectos de inversión, y cómo capitalizar los frutos de la Cumbre de la Tierra de 1993.

Las salvaguardias de inversión en los créditos del Banco Mundial:

“Las políticas ambientales y sociales del Banco Mundial son claves para asegurar que los proyectos financiados por esta institución multilateral en beneficio y para la protección de las personas y el medio ambiente”, dice Kyle Peters, vicepresidente del Servicio de Operaciones de Políticas. “Las políticas actuales han sido realmente útiles, pero el problema que enfrentan nuestros clientes han cambiado en los últimos 20 años”. La propuesta tiene como objetivo mantener y mejorar las protecciones existentes, incluyendo la mejora de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, los pueblos indígenas, las comunidades y el medio ambiente, incluidas las disposiciones de control de plagas, seguridad de presas y carreteras, los hábitats naturales y el patrimonio cultural. También destaca la importancia de la no discriminación. (World Bank 2014, p.2 ss.)

“Nos proponemos extender las protecciones existentes para los pueblos indígenas y adoptar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”, dijo Mark King, jefe de normas sociales y ambientales. “En casos excepcionales, cuando existen riesgos de exacerbar las tensiones étnicas y los conflictos civiles, o en los que la identificación de los pueblos indígenas no es coherente con la Constitución del

país, en consulta con los afectados por un proyecto concreto, se propone un enfoque alternativo para la protección de los pueblos indígenas. Sin embargo, debe subrayarse que cualquier enfoque alternativo cuente con la aprobación de nuestro Consejo, que representa a todos los países miembros “, dijo King: “El marco propuesto también fortalecerá la protección de la biodiversidad, de las garantías políticas existentes de los hábitats naturales y los bosques y la adopción de requisitos más estrictos, y proporcionar más claridad sobre la forma en que deben ser mitigados los riesgos y efectos adversos sobre los hábitats naturales”. (World Bank 2014 p. 2 ss.)

Conclusiones y recomendaciones:

El caso de la re-aseñamiento de Moravia

Desde 1950 en Colombia, las agencias estatales y multilaterales han patrocinado la migración de los agricultores a las ciudades, primero tienen los trabajadores para la industrialización, entonces para tecnificar la agricultura, evitar la expansión de la frontera agrícola y permitir la explotación económica de las empresas localizadas en áreas rurales (sectores agropecuario y minero), para la subsistencia de las familias rurales sin empleo, tener oportunidades de educación, y por motivo de seguridad para la integridad personal y familiar.

El barrio ‘Moravia’ de Medellín comenzó a poblarse en una zona céntrica de la ciudad a finales de la década de 1950, con los migrantes del campo y otras zonas de la ciudad, a orillas del río que corre a través de la ciudad, y cerca del centro de la ciudad. A mediados de la década de 1970 la administración de la ciudad permitió utilizar la parte del territorio contigua al río como basurero, un hecho que aumentó su población gradualmente. Aunque el vertedero se trasladó en 1984, el barrio creció rápidamente (Zornoza, 2010). Las condiciones de salud y seguridad social en la zona, fueron muy difíciles durante los 20 años siguientes, hasta que la administración municipal en el año 2004 puso en marcha un amplio plan de mejoramiento integral en Moravia a través de una intervención que involucró el hábitat, la salud pública, la educación, la cultura, el empleo, el espacio público, el medio ambiente, y en especial la vivienda, a partir de un estudio de la Universidad de Antioquia en 2005, que puso de manifiesto la urgencia de reasentar a las personas que habitaban en la cima del cerro de basura por razones de salud. Durante los próximos seis años, un “plan parcial” se centró en el reasentamiento de familias en unidades familiares construidas al interior del barrio y en otras zonas de la ciudad.

Hoy, 10 años después de la intervención pública, la administración abandonó completar las acciones presupuestadas y se concentró en desalojar y demoler viviendas informales y cambiar el uso del suelo del sector más comercial ubicado al sur del barrio, forzando a las familias a vender y reasentarse por su cuenta en otro sector de la ciudad, distante de zona de trabajo y de su tejido social. La comunidad se ha dividido entre los amigos de la administración, que tienen familiares empleados por la administración municipal y sus entidades descentralizadas, otros que reconocen las ventajas que ofrece la intervención pública, pero consideran que las soluciones no han funcionado plenamente, y otros que conforman la “resistencia” a las medidas de fuerza impuesta por la alcaldía, cuyo mandato expira en diciembre de 2015.

La intervención integral original debe ser completada por la administración municipal, que ha utilizado la policía para desalojar a la fuerza a familias que siguen ubicadas en zonas declaradas en situación de riesgo en el sector. Los tradicionales líderes del barrio han comenzado un proceso de formación de ciudadanía, capacitación en gestión pública y mecanismos de gobernanza local, dirigido a apoyar la reconstrucción del tejido social de su entorno y facilitar la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones que les conciernen. En particular las relacionadas con sus nuevos asentamientos para continuar con los programas de gestión específicos en la construcción de las viviendas. Dado el origen rural y popular de la población, posiblemente las decisiones unilaterales de reasentamiento de algunas familias de parte del alcalde han fracasado parcialmente, por reubicar algunos los ciudadanos lejos de las habituales actividades económicas de la familia, o por reasentarlas en apartamentos con superficies mínimas (40 m²) cuando se trata de familias numerosas.

A medida que la administración de la ciudad y su Institución de vivienda social, han decidido hacer caso omiso de las mesas de concertación antes establecidas, acordadas con las administraciones anteriores, es necesario entonces proponer desde la misma comunidad, un mecanismo de consenso o de participación en la toma de decisiones, a los sucesivos re-asentamientos del barrio Moravia que responda no sólo a la oferta de viviendas realizada por la alcaldía, sino también a las necesidades reales de las personas que son sujetos de los re-asentamiento humanos.

Recomendaciones

Una recomendación para que los líderes del barrio Moravia logren participar en las decisiones sobre el reasentamiento de familias en otras partes del distrito o de la ciudad, es un acuerdo entre la administración municipal y la *“Asociación de líderes de*

Moravia” concebido como una organización no-estatal, sin fines de lucro, para participar en los procesos de decisión, formulación y adopción de programas sociales, ambientales y culturales en el territorio.

Esta organización, con personería jurídica, permitiría firmar convenios marco con la administración municipal, reconocidos por los funcionarios del gobierno, y tiene un alcance efectivo y duradero, si ese término se acuerda durante más tiempo que el período de una administración municipal (4 años).

Para la administración de la ciudad se propone que su gestión se encuadre en las necesidades de las comunidades locales, antes que en la oferta de programas preconcebidos para las comunidades que no los demandan, pero que si requieren con urgencia de programas que consultan a sus percepciones y responden de manera realista a sus problemas sociales, culturales, ambientales y económicos. Los Alcaldes se posesionan con el paquete de programas de sus financiadores sin diagnósticos ni territorios, lo público como negocio.

Referencias bibliográficas

Ananth Pur, Kripa and Mick Moore (2007) *Ambiguous Institutions: Traditional Governance and Local Democracy in Rural India*. IDS working paper 282 May 2007 Institute of Development Studies at the University of Sussex Brighton, UK

Andersen, Ida-Elisabeth & Birgit Jæger (1999) Scenario workshops and consensus conferences: towards more democratic decision-making. *Science and Public Policy*, volume 26, number 5, October 1999, pages 331–340, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GU1 2EP, England

Ansell, Chris & Alison Gash; (2007) *Collaborative Governance in Theory and Practice* University of California, Berkeley. Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc.

Bogumil, Jörg (2007) *Recasting Decision Making in Local Government*. Recovered on 8 May 2015 at <http://www.difu.de/publikationen/editorial-recasting-decision-making-in-local-government.html>, Berlin, Germany

Cortina, Adela (1993) *Ética aplicada y democracia radical*. Editorial tecnos, Madrid, España

Devas, Nick & Ursula Grant (2003) Local Government Decision-Making—Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Admin. Dev.* 23, 307- 316 (2003) Published online 28 July 2003 in Wiley InterScience. International Development Department, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, UK

Geurts, Thei (2011) *Public Policy Making: The 21st Century Perspective*. Be Informed Wapenrustlaan 11-31 7321 DL Apeldoorn, The Netherlands
Hajer, M. and Wagenaar, H., (eds.), *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Network Society*, New York: Cambridge University Press, 2003. UK

Haruța, Cristina & Bianca Radu (2010) Citizen participation in the decision making process at local and county levels in the romanian public institutions. Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Hooghe, Liesbet & Marks, Gary (2002) *Unraveling the Central State, But How? Types of Multi- Level Governance*. The Department of Political Science, Institute for Advanced Studies (IHS), Stumpergasse 56, A-1060 Vienna, Austria

Independent Local Government Review Panel. (2010) *Local representation and decision making*. Paper prepared in response to the Independent Review's Terms of Reference, based on available research and government information. Sidney, Australia

Lynam, Siobhán (2006) *Community Development and Public Policy Guidance on the application of community development approaches to different aspects of anti-poverty and social inclusion work*. Combat Poverty Agency, Dublin, Ireland

Mokwena, Lebogang & Ebrahim Fakir, (2009) *Democratic decision-making and development at the local level – lessons from rural botswana centre for policy studies* January 2009 Johannesburg , South Africa

Pobal (2006), *Working Together, Working for Change: The Achievements of the Local Development Social Inclusion Programme*. Dublin: Pobal

Rawls, John (1978) *Teoría de la Justicia*. Fondo de Cultura Económica -FCE. Madrid, España

Sustainable Development Commission (March 2005). Local decision-making: LSPs, Sustainable Community Strategies and LAAs and sustainable Development. Securing the Future – delivering UK sustainable development strategy. London, UK

Wakefield, Shawna (2005). Gender and local level decision making: Findings from a Case Study in Samangan. Afghanistan Research and Evaluation Unit. Case Studies Series. EC, UNAMA, The Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Kabul, Afghanistan

World Bank (2014) Propuesta para fortalecer las salvaguardas sociales y ambientales. Recovered 9th May 2015 <http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/07/30/world-bank-begin-discussions-proposal-strengthen-social-environmental-safeguards>

World Health Organization –WHO- Western Pacific Region. (1999) Understanding the policy, political and decision-making processes module 4. Health Service Planning and policy-making. Melbourne, Australia

Zornoza, Juan Antonio, (2010) Políticas de inclusión social en Medellín. Moravia 2004-2010. La investigación de las políticas públicas. RAPP. Universidad Nacional; Medellín. pp. 96-129

Zurbriggen, C. & AS. Milanese; (2008) La Gobernanza territorial; XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, nov. 2008